

La FP no puede ser un negocio: juventud, igualdad y futuro en juego trampa generacional

María del Barrio Colmena

LA FORMACIÓN PROFESIONAL se ha convertido en la principal vía de cualificación para la juventud trabajadora en nuestro país. Hoy, casi seis de cada diez jóvenes optan por la FP porque la perciben como una opción útil, práctica y con mayor empleabilidad. Sin embargo, ese crecimiento sostenido no ha venido acompañado de una expansión equivalente de la red pública. Y cuando lo público no crece, el mercado ocupa su lugar.

El informe “La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud” demuestra con datos lo que el profesorado, el alumnado y las familias ya viven en primera persona: la oferta privada absorbe cada vez más demanda, especialmente en ciclos de alta empleabilidad y en modalidad a distancia. A nivel estatal, cerca de un tercio del alumnado cursa ya FP en centros privados, superando el 40% en territorios como Euskadi o acercándose al 38% en la Comunidad de Madrid.

Este fenómeno no es neutro. Tiene consecuencias sociales, territoriales y de género.

Cuando faltan plazas públicas, la alternativa es pagar. Y no hablamos de cantidades simbólicas: en Grado Superior los costes pueden oscilar entre 3.000 y 6.000 euros anuales. Para muchas familias trabajadoras, esto supone endeudamiento o directamente la renuncia al itinerario formativo deseado. La educación deja de ser un derecho y se convierte en un filtro por renta.

Desde una perspectiva feminista, esta privatización agrava desigualdades estructurales. Las mujeres jóvenes ya enfrentan mayores tasas de parcialidad, brechas salariales y trayectorias laborales más interrumpidas por los cuidados. Si además el acceso a ciclos estratégicos —como los tecnológicos o sanitarios— depende de la capacidad económica, se refuerza una doble discriminación: por clase y por género.

El propio informe señala un dato alarmante: cuatro de cada diez jóvenes declaran haber recibido poca o ninguna orientación sobre FP en Secundaria, pero en el caso de las alumnas la falta de información suficiente es especialmente acusada. Esta carencia alimenta la segregación horizontal: ellas siguen concentrándose en familias profesionales feminizadas, vinculadas a cuidados y servicios, mientras que las más tecnológicas y mejor remuneradas permanecen masculinizadas.



“Es necesaria una apuesta decidida por la orientación educativa con perspectiva de género, que rompa estereotipos

profesionales y acompañe a las jóvenes en el acceso a sectores estratégicos”.

Si a esto sumamos la expansión desregulada de la FP en línea privada, el riesgo es claro: consolidar un modelo dual donde quienes pueden pagar acceden a determinados ciclos con mejores redes de prácticas, mientras que el resto queda relegado a itinerarios con menor acompañamiento y mayores tasas de abandono.

La desigualdad también es territorial. En comunidades con fuerte presión de demanda, la insuficiencia de plazas públicas deriva sistemáticamente al alumnado hacia la privada. En zonas rurales o despobladas, la falta de implantación de ciclos públicos obliga a migrar o a recurrir a la modalidad a distancia. El lugar de nacimiento sigue condicionando el derecho efectivo a la educación.

Frente a este escenario, CCOO lo tiene claro: la FP debe ser una política pública estratégica, no un nicho de mercado. Si la juventud apuesta por la Formación Profesional como vía de emancipación, el Estado debe garantizar una red pública suficiente, gratuita y de calidad.

Eso implica un plan plurianual de ampliación de plazas públicas en los ciclos de mayor demanda; inversión real en talleres, equipamientos y plantillas; reconocimiento y refuerzo de las tutorías en la FP Dual; regulación estricta de la modalidad en línea; y transparencia en los datos de listas de espera y derivaciones a la privada.

Por ello es necesario una apuesta decidida por la orientación educativa con perspectiva de género, que rompa estereotipos profesionales y acompañe a las jóvenes en el acceso a sectores

estratégicos. Y supone garantizar que las prácticas en empresa no se conviertan en mano de obra barata, sino en aprendizaje con derechos.

La FP puede ser una herramienta poderosa para reducir el abandono educativo, combatir el desempleo juvenil y avanzar hacia un modelo productivo más sostenible y justo. Pero solo lo será si se desarrolla desde lo público, con planificación democrática y con la igualdad como eje.

La juventud trabajadora no necesita créditos para estudiar; necesita derechos. No necesita marketing educativo; necesita plazas públicas. Y no necesita un mercado que seleccione por renta, sino un sistema que garantice oportunidades reales para todas y todos.

Defender la FP pública es defender el futuro de nuestras jóvenes. Y desde CCOO no vamos a permitir que ese futuro se ponga en venta. **ii**

María del Barrio Colmena responsable de juventud de la Federación de Enseñanza de CCOO

Informe: [La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud](#)